



Asamblea General

Distr. general
15 de junio de 2012

Español solamente

Consejo de Derechos Humanos

20º período de sesiones

Tema 3 del programa

**Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, incluido
el derecho al desarrollo**

Exposición escrita* presentada por la Permanent Assembly for Human Rights, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva especial

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición por escrito que se distribuye con arreglo a la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

[4 de junio de 2012]

* Se distribuye esta exposición escrita sin editar, en los idiomas tal como ha sido recibida de la organización no gubernamental.

Efectos de la deuda externa

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), referenciándose en el Informe del experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y otras obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno disfrute de todos los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales, A/64/289, y la Resolución del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/RES/17/7, desea esgrimir algunas consideraciones, particularmente, en lo que concierne a la Deuda Externa en Argentina.

De ese modo, en primer lugar, señala que el endeudamiento desenfrenado del Estado Argentino se produjo durante la última dictadura militar que se usurpó el poder político durante el período 1976-1983. En ese lapso la Deuda Externa Argentina creció formidablemente: de 7.000 millones de dólares a 43.000 millones. En la década del 80 y con el retorno de la democracia, la Deuda Externa continuó en expansión, lo curioso es que al Estado Argentino le fueron negados nuevos préstamos hasta que pagara los anteriores. La causa del aumento: el alza unilateral de los intereses dispuesta por la Reserva Federal de los EEUU que elevó la tasa inicial de 6 % a 19 %. La deuda se transformó, entonces, en impagable. A comienzos de la década del 90 la Deuda Externa Argentina ascendía a 60.000 millones de dólares.

Luego de decenas y decenas de miles de millones de dólares pagados, canjes y quitas, la Deuda Externa Argentina actual se ha multiplicado varias veces, ascendiendo a cifras astronómicas. Las consecuencias sobre el pleno goce, disfrute y ejercicio de los derechos humanos, particularmente de los derechos económicos, sociales y culturales, resultan calamitosas. La pobreza, la desnutrición infantil, las deficiencias en los servicios de salud y de educación, principalmente en zonas no urbanizadas y en provincias del interior del país, se presentan como fenómenos que revisten gravedad sobrada y generan preocupación y alarma. Las políticas públicas del actual gobierno nacional destinadas a combatir las injusticias sociales y garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, no obstante los avances, resultan insuficientes. En este contexto, los miles de millones de dólares dispuestos anualmente para el pago de deuda, intereses y demás servicios constituyen una afrenta a los derechos humanos de la población.

Cabe destacar, en segundo lugar, que la Deuda Externa Argentina es ilegal, ilegítima e inmoral. Ha sido contraída en violación expresa de las disposiciones constitucionales vigentes, y atenta, por cierto, también contra las normas del Derecho Internacional. Lo fue, en un enorme porcentaje, por un gobierno de facto que hoy está siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad. Procede plenamente calificarla, de acuerdo con la doctrina del Presidente de los EEUU William H. Taft, como “Deuda Odiosa”. Doctrina que ha sido aplicada en reiteradas ocasiones, entre ellas en Irak, luego de la caída del régimen de Saddam Husein. Además, de acuerdo con principios generales del Derecho, que constituyen fuente principal del Derecho Internacional, el alza unilateral de intereses dispuesta, primero, en los 80 y, luego, en los 90, es indiscutiblemente ilegal. La usura ha sido condenada de forma unánime por la comunidad internacional. Por otra parte, menester es destacar que la Deuda Externa Argentina ha sido objeto de una causa judicial de suma trascendencia a nivel nacional. En ella se determinó su carácter fraudulento, verificándose la existencia de 477 irregularidades (Fallo del Juez Ballesterio de fecha 13 de junio de 2000, en autos caratulados: “Olmos, Alejandro S/dcia”- Expte. N° 7.723/98- en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de la Capital Federal, Secretaría N°4).

Existen numerosos argumentos que demuestran la ilegalidad e ilegitimidad de la Deuda Externa Argentina así como también de la de otros países de América Latina, que en razón

de brevedad no serán siquiera reseñados. No obstante, cabe aquí citar la opinión de expertos estudiosos de la materia en el orden nacional e internacional. Así, de acuerdo con la tesis que fuera desarrollada por el diplomático y jurista argentino Dr. Miguel Ángel Espeche Gil, resulta necesario, como mínimo, que los Estados promuevan, a través de los órganos u organismos internacionales competentes, la solicitud de una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acerca de la licitud o ilicitud del alza unilateral e ilimitada de las tasas de interés de la Deuda Externa y si tal alza es compatible con el nuevo orden internacional y en particular con el ejercicio del derecho al desarrollo que la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 4 de diciembre de 1986 reconoce expresamente a los Estados. En ese sentido se ha pronunciado la XVI Reunión de Asuntos Económicos y Deuda Externa del Parlamento Latinoamericano (Bs. As., agosto de 2002), entidades y legisladores nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (que agrupa 42 Universidades Nacionales Argentinas) y el Consejo Permanente de Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales.

La APDH considera que la legalidad de la Deuda Externa de países en desarrollo, como Argentina, o con situaciones de pobreza y retraso en la satisfacción de necesidades elementales, debe ser puesta en consideración de un tribunal internacional imparcial que detente la legitimidad jurídica y política suficiente y que dictamine conforme a Derecho Internacional. Insta, por tanto, a los Estados a que promuevan tal iniciativa.
